Comisión de Inversiones

Por la creciente proporción que representan dentro del gasto público los recursos financieros para inversión y por considerar que las inversiones gubernamentales son un elemento determinante del desenvolvimiento económico y social de México, el Ejecutivo Federal, en los últimos años, ha adoptado diversas medidas con el propósito expreso de lograr una adecuada orientación y coordinación de los programas de inversiones de las secretarías y departamentos de Estado, organismos descentralizados y empresas de participación estatal.

Un primer antecedente que revela ya la preocupación del Gobierno Federal por lograr, en cierta medida, los propósitos enunciados, se encuentra en la Ley para el Control de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal, publicada en el Diario Oficial del 31 de diciembre de 1947. En dicha ley se facultaba a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a controlar y vigilar las operaciones de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal, con el fin de informarse de su marcha administrativa y procurar su correcto funcionamiento económico a través de auditorías e inspecciones técnicas. Mediante el uso de estas facultades, la Secretaría de Hacienda quedó autorizada a solicitar in-

formes financieros, revisar, vetar y reformar presupuestos y programas anuales de operación e inversiones de los organismos comprendidos dentro de la citada Ley.

Posteriormente, por Decreto Presidencial del 31 de enero de 1948 se creó la Comisión Nacional de Inversiones. Esta institución, que dependía de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se estableció con funciones que tenían un carácter meramente administrativo referentes al control, vigilancia y coordinación de los organismos a que aludía la Ley para el Control de Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal. Brevemente puede decirse que las actividades que llevó a cabo esta Comisión tuvieron en un principio como finalidad primordial adquirir un conocimiento minucioso de los presupuestos de gastos de los organismos descentralizados y de empresas de participación estatal, con el propósito de recomendar las medidas que fueran convenientes para obtener el mayor beneficio de los recursos financieros disponibles por dichas instituciones. El control de los presupuestos de esos organismos no se proyectaba limitarlo únicamente a los gastos de inversión, sino que comprendía el total de los gastos de esas dependencias. Con ese obje-

to la Comisión de Inversiones, utilizando personal técnico integrado por contadores y economistas, se dedicó, en una primera etapa de sus actividades, a practicar auditorías exhaustivas y estudios económicos que abarcaban todos los aspectos de las dependencias aludidas. De este modo, se trataba de conocer en forma completa y detallada todos y cada uno de los aspectos administrativos y de operación de las instituciones que se habían incluido en el decreto que creó la Comisión de Inversiones.

El riguroso control que se pretendía establecer, a través de la Secretaría de Hacienda, sobre los gastos totales y de operación de los citados organismos, con base en los estudios y recomendaciones de la Comisión de Inversiones, dio lugar a una firme oposición por parte de algunos organismos de importancia que, acudiendo en algunos casos a procedimientos legales y, en otros, solicitando simplemente a la Secretaría de Hacienda que aplazara la intervención de la Comisión en sus dependencias, opusieron continua resistencia para que se llevara a cabo la labor que se había encomendado a la Comisión. Como resultado de la actitud hostil que mostraron los funcionarios de ciertas instituciones importantes debido a la intervención fiscalizadora de la Comisión y, si a ello se agrega el hecho de no haberla dotado desde un principio de suficiente autoridad y apoyo para que

cumpliera con los términos del decreto presidencial que la creó, no es extraño que paulatinamente esta Comisión se ocupara exclusivamente de estudiar organismos de pequeña importancia manteniéndose así al margen de sus actividades las principales dependencias descentralizadas. Como consecuencia de lo anterior, esa Comisión mantuvo intensa actividad sólo durante los 10 primeros meses de 1948, disminuyendo posteriormente el ritmo de sus trabajos hasta que en diciembre de 1949 se suspendieron totalmente sus labores al derogarse la ley que la había establecido.

No cabe duda que la misión que se había encomendado a ese organismo era de suma importancia, en cuanto a la finalidad de lograr el mejor aprovechamiento de los cuantiosos recursos financieros que ya desde esos años administraban los organismos descentralizados y empresas estatales, pero la intervención tan severa y el control tan estricto que se proyectaba aplicar con el auxilio de los estudios y dictámenes de la Comisión de Inversiones, limitaba seriamente la autoridad de los funcionarios responsables de la operación de las instituciones sujetas a dicha ley.

Si bien es cierto que las funciones de la Comisión de Inversiones fueron de carácter exclusivamente administrativo y la utilización que se proyectaba dar a esos estudios y recomendaciones no es-

taba orientada a formular programas de inversiones de los organismos controlados por la ley, buscando de este modo su coordinación y jerarquización, cabe apuntar que en caso de haber continuado esa Comisión y si la Secretaría de Hacienda hubiera adoptado las medidas de control y vigilancia que se consideraran juiciosas, es muy probable que habría mejorado la orientación y el aprovechamiento de los recursos financieros de esos organismos en beneficio de la Economía Nacional.

Una vez que suspendió sus actividades la Comisión de Inversiones, los esfuerzos del Gobierno Federal para controlar en sus distintos aspectos los programas de inversión del sector público tuvieron escasa importancia y bien puede decirse que, salvo el intento mencionado, durante la pasada administración no se adoptaron medidas signas de mención dirigidas a coordinar, jerarquizar y orientar debidamente los programas de inversiones de las distintas dependencias del sector público.

Durante el Gobierno actual se han realizado esfuerzos sistemáticos no sólo orientados a mejorar el conocimiento de la inversión pública, sino concretamente dirigidos a controlar las obras que ejecutan las instituciones gubernamentales, buscando su coordinación, jerarquización y el aprovechamiento óptimo de los recursos financieros para inversión. En efecto, el interés del Go-

bierno Federal por lograr dicho fin se revela en el Acuerdo Presidencial de 9 de junio de 1953 por el cual se obliga a las Secretarías de Estado, Departamento del Distrito Federal, organismos descentralizados y empresas de participación estatal a proporcionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sus programas de inversión referentes al período 1953-1958. En esa información se debería consignar las obras a ejecutar en cada uno de los años del sexenio y comunicar oportunamente los cambios efectuados en el citado programa. Asimismo, se precisa que dicha información deberá complementarse con un proyecto de financiamiento del programa de inversiones, y la especificación, según el caso, del origen de fondos, señalando el monto de recursos provenientes del Presupuesto, emisión de bonos, créditos del exterior y fondos propios.

Con el auxilio de esa información, las secretarías de Hacienda y Economía deberían presentar a la consideración del señor Presidente de la República un programa coordinado de las inversiones del sector público. En este mismo Acuerdo, claramente se especificaba la necesidad de coordinar los programas de inversiones que realizan las diversas dependencias gubernamentales, organismos descentralizados y empresas de participación estatal, como un instrumento indispensable para realizar la po-

lítica económica más adecuada al desenvolvimiento económico y social del país. Con el propósito de cumplir el Acuerdo Presidencial aludido, el 20 de julio de 1953 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dictó un Acuerdo creando el Comité de Inversiones, organismo al que se encomendó reunir la información necesaria a fin de elaborar un programa debidamente jerarquizado y coordinado de inversiones públicas para el sexenio 1953-1958 que debería someterse a la consideración del señor Presidente de la República.

El Comité de Inversiones funcionó por un período corto, aproximadamente un año, como una oficina de la Secretaría de Hacienda; sin embargo, durante este breve lapso llevó a cabo una labor encomiable, tanto por la valiosa información que reunió sobre las inversiones del sector público como por los acuciosos estudios realizados sobre temas de singular importancia en la formulación de la política económica del país, tales como el nivel conveniente de la inversión pública y privada, financiamiento de la inversión pública, canalización correcta de la inversión gubernamental y otras investigaciones que han permitido un mejor conocimiento de la estructura y tendencias generales de las inversiones del sector público.

Poco tiempo después, al considerar la conveniencia de ampliar las facultades y atribuciones del Comité de Inversio-

nes, el Ejecutivo Federal expidió el 7 de septiembre de 1954 un Acuerdo creando la Comisión de Inversiones como un organismo dependiente del Presidente de la República. En conformidad con dicho Acuerdo Presidencial se encomendó a esta Comisión "estudiar los proyectos de inversiones públicas que reciba con objeto de valorar, en consonancia con las más apremiantes necesidades del país, la importancia particular que cada obra reviste en su aspecto económico y social. Realizar los estudios económicos que sean necesarios a efecto de poder establecer de manera coordinada con los objetivos de la política económica hacendaria y social, la jerarquización, la coordinación y el papel que deben desempeñar las inversiones públicas en el desarrollo integral del país. Con base en estos estudios, la Comisión de Inversiones deberá someter a la consideración del Ejecutivo Federal un programa coordinado y jerarquizado de las inversiones públicas, así como sugerir al propio Ejecutivo los cambios que deben realizarse en dicho programa".

La Comisión de Inversiones inició sus actividades en el mes de septiembre de 1954 y se integró con un personal técnico reducido constituido por un Director, un Subdirector, un Jefe de Programación y diez analistas que se han especializado en el conocimiento de los distintos campos que cubre la

inversión pública: comunicaciones y transportes, irrigación, fomento agrícola, obras portuarias, energía y combustibles, escuelas, hospitales y viviendas. Los analistas disponen de personal técnico auxiliar para realizar las labores a su cargo. Para cumplir con las funciones que le fueron encomendadas, la Comisión ha orientado sus actividades primordialmente hacia el logro de los objetivos siguientes:

- 1) Determinar los niveles convenientes de inversión pública, considerando las necesidades de inversión y atendiendo a los recursos financieros disponibles, situación monetaria y cambiaria y aquellos otros elementos ligados a la inversión del sector público.
- 2) Estudiar los proyectos de inversión del sector público a fin de evaluar su beneficio económico y social; coordinar las distintas inversiones y jerarquizar las inversiones propuestas en función de los medios financieros y las necesidades de inversión.
- 3) En función de lo anterior, formular programas anuales de inversión pública para someterlos a la consideración del Jefe del Ejecutivo.
- 4) Proponer cambios en la orientación de las inversiones, reestructuración de los programas o promoción de nuevos proyectos, como resultado de las necesidades de inversión, coordinación y

jerarquización de las inversiones del sector público.

- 5) Sugerir al propio Jefe del Ejecutivo, durante el ejercicio del presupuesto, las modificaciones que deben realizarse a los programas aprobados.
- 6) Realizar estudios sobre el financiamiento de la inversión del sector público.
- 7) Estudiar las tendencias de la economía nacional y contribuir a la programación de la política económica general para enmarcar y justificar las inversiones del sector público.
- 8) Determinar necesidades de inversión de los distintos sectores en los próximos 10 años.
- 9) Elaborar estudios generales sobre distintos temas ligados estrechamente a la inversión pública, tales como la inversión pública y el desarrollo económico; relaciones entre la inversión pública y la inversión privada; la inversión pública y la balanza de pagos; operación y administración de las obras públicas; política de inversiones públicas; coordinación de las inversiones federales, estatales y municipales; distribución geográfica de la inversión pública.
- 10) Formular un inventario de las obras públicas en proceso de ejecución a fin de conocer los distintos aspectos de los

proyectos incluidos en los programas de inversión anual.

11) Elaborar diversas estadísticas sobre la inversión pública y su financiamiento.

En una u otra forma, los estudios y actividades de la Comisión están íntimamente ligadas a la formulación de los programas anuales de inversión pública que se someten a la consideración del Ejecutivo Federal. Para este fin, con la debida anticipación al próximo ejercicio fiscal se solicita a las dependencias del sector público envíen a la Comisión sus programas de inversiones con el objeto de estudiar los proyectos que los integran. Los estudios que lleva a cabo la Comisión tienen como propósito esencial evaluar los beneficios económicos y sociales de las distintas obras proyectadas, su grado de coordinación con las diversas inversiones gubernamentales y su jerarquía en función del conjunto de obras que proyecten realizar las dependencias del sector público. Es importante señalar que dichos estudios se limitan exclusivamente al aspecto económico y social de las distintas obras proyectadas, así como a su grado de coordinación con otras inversiones, dejando todo lo concerniente a los aspectos técnicos de los proyectos bajo la exclusiva responsabilidad de la dependencia a cargo de la obra.

Independientemente de los estudios que formula la Comisión sobre los programas de obras del sector público, la Secretaría de Hacienda, en común acuerdo con el Ejecutivo Federal, comunica oportunamente a la Comisión el monto de los recursos presupuestales que proyecta destinar para fines de inversión en el próximo ejercicio fiscal. Igualmente todas aquellas dependencias que no reciben fondos presupuestales para efectuar sus inversiones informan a la Comisión, junto con su programa de inversiones, el origen y monto de los recursos financieros que aplicarán a la ejecución de las obras proyectadas. De este modo se dispone, por una parte, de los programas de inversiones que tienen interés en realizar las distintas dependencias gubernamentales y, por la otra, se conocen los recursos financieros disponibles para realizar las obras proyectadas.

Mediante los estudios que realiza la Comisión sobre la necesidad e importancia económica y social de los proyectos y, conociendo, además el monto de los recursos financieros disponibles para inversiones, la Comisión distribuye éstos entre las distintas obras propuestas por las dependencias y, de este modo, formula un programa preliminar para el conjunto del sector público. Como la ejecución de un programa de obras públicas no depende exclusivamente de la bondad de los proyectos

que lo integran, o de la disponibilidad de medios financieros, sino que es necesario también tomar en consideración el efecto que tendrá el gasto público en inversión sobre la economía nacional, antes de someterlo a la consideración del Ejecutivo Federal, la Comisión obtiene el punto de vista de las autoridades hacendarias y monetarias sobre la magnitud y estructura del programa y su impacto probable en la economía nacional. Así, con la opinión de dichas autoridades se revisa nuevamente el programa a fin de que el nivel de inversión gubernamental y su estructura sean compatibles con la política económica adoptada por la administración.

Finalmente, el programa de inversiones para el conjunto del sector público se somete a la consideración del Ejecutivo Federal, el cual sugiere a su vez los ajustes y modificaciones que juzgue convenientes. En su oportunidad, la Comisión comunica a las distintas dependencias el programa que le ha sido autorizado por el Jefe del Ejecutivo, así como las condiciones a que debe someterse para su ejecución.

El control del programa aprobado por el Presidente de la República está a cargo primordialmente de las secretarías de Hacienda y Bienes Nacionales e Inspección Administrativa. La Secretaría de Hacienda, a través de su Dirección de Egresos, impone un estricto control sobre las inversiones que reali-

zan las dependencias, que reciben fondos presupuestales para la ejecución de sus inversiones, ya que sólo autoriza las órdenes de pago para cubrir el importe de una inversión cuando ésta ha sido previamente autorizada por el C. Presidente de la República. De esta manera, sólo con la aprobación específica de una obra por parte del Jefe del Ejecutivo, la Dirección de Egresos expide las órdenes de pago correspondientes para que las dependencias estén en posibilidad de retirar fondos de la Tesorería de la Federación para llevar a cabo la inversión aprobada.

Por su parte, la Secretaría de Bienes Nacionales no aprueba contratos, ni revisa las estimaciones de los trabajos realizados, ni tampoco interviene en la adquisición de bienes necesarios en la realización de las obras públicas, si la ejecución de éstas no han sido debidamente estudiadas por la Comisión. Sin esta intervención de la Secretaría de Bienes Nacionales las dependencias o los contratistas no pueden efectuar las gestiones necesarias ante la Dirección de Egresos para que ésta a su vez expida las órdenes de pago correspondientes.

Los estudios que realiza la Comisión a fin de formular un programa anual de obras públicas comprenden distintos aspectos de la inversión gubernamental. En primer término se ha considerado conveniente determinar las necesidades que tiene el país de las distintas

obras que tradicionalmente se han encomendado a las dependencias del sector público. En México, como en todo país en proceso de desarrollo económico, obviamente existen innumerables necesidades de obras básicas que corresponden al Gobierno atender. Como consecuencia, puede decirse que prácticamente toda la inversión que se realiza presta un servicio y mejora en cierto grado las condiciones económicas y sociales de la población; sin embargo, como no es posible emprender todas las obras que se requiere para satisfacer las necesidades de inversión, es preciso determinar cuáles son las necesidades más apremiantes que deben atenderse para resolver debidamente los múltiples y complejos problemas que se plantea el desenvolvimiento económico del país y, de esta manera, jerarquizar dichas necesidades conforme a determinados criterios. Por esta razón, ha sido preocupación permanente de la Comisión, desde que inició sus actividades, realizar una serie de estudios con el propósito de precisar las necesidades de obras públicas y su importancia relativa tanto en el presente como en los próximos años.

Un conocimiento adecuado de las necesidades de inversión no sólo permite precisar su magnitud y jerarquía en cuanto a la urgencia de atenderlas, sino que constituye un valioso auxiliar para fijar metas de inversión cuyo cumpli-

miento, dentro de un período determinado, permitirá resolver paulatinamente las necesidades que existen de ejecutar obras básicas orientadas a acelerar el desarrollo de la economía nacional.

Es obvio que frente a los innumerables requerimientos de inversión pública se tiene como factor limitativo para atender plenamente dichas necesidades la escasez de recursos financieros, técnicos y humanos para inversión. Precisamente por la presencia de esta limitación surge la conveniencia de realizar, en primer término, aquellas obras que proporcionen los mayores beneficios a la colectividad. Por consiguiente, para distribuir los fondos de inversión de las distintas obras que proyectan ejecutar las dependencias gubernamentales, es necesario acudir a ciertas prácticas que permitan evaluar la importancia económica y social de cada uno de los proyectos propuestos para integrar los programas anuales de inversión. De este modo, a través de la evaluación de los distintos proyectos es posible establecer su importancia relativa y estructurar así un programa de inversiones gubernamentales fincado en una jerarquización racional de los diversos proyectos de inversión.

Para evaluar las distintas inversiones que realiza el sector público ha sido preciso adoptar ciertos criterios básicos que permitan asignar grados de jerar-

quía a las distintas obras. En realidad, estos criterios expresan la prioridad o importancia que se ha dado a las necesidades que se espera atender con las obras y la política de inversión pública seguida por la administración. Precisamente por esta circunstancia no siempre es posible o aconsejable adoptar criterios de inversión semejantes para países en distinta etapa de desarrollo, sino que más bien estos criterios deben ajustarse esencialmente a las características económicas y sociales del país y a la política de obras públicas que decida seguir el Gobierno.

En el caso de la Comisión, los criterios de inversión que han tenido dominante importancia han sido fundamentalmente los siguientes: a) productividad de la obra, o sea su relación beneficio-costos; b) grado de coordinación con otros proyectos; c) beneficio social; d) porcentaje de avance en caso de tratarse de una obra en proceso; e) defensa o protección de inversión realizada, igualmente en el caso de una obra en proceso; y f) volumen de ocupación generado por la operación del proyecto.

Si bien es cierto que la evaluación económica y social de un proyecto es un instrumento adecuado para precisar la importancia relativa de una inversión, no se ha pasado por alto que existen serias limitaciones para evaluar algunos proyectos que, por sus característi-

cas particulares, no es posible determinar el valor económico de los beneficios derivados de la operación de la obra. Quizá el caso más patente se encuentra en los proyectos de carácter social como escuelas, hospitales y obras sanitarias. Asimismo, se tienen serias limitaciones para evaluar ciertos proyectos ferroviarios que cubren una vasta región heterogénea en cuanto a sus características generales. En la misma situación se encuentran algunas carreteras, cuya área de servicio es a veces imprecisa y, en consecuencia, los beneficios imputables a la inversión no pueden estimarse fácilmente. También se presenta este caso con proyectos de agua potable y alcantarillado, pavimentos, electrificación rural y otro tipo de proyectos cuyos beneficios son a menudo intangibles y, por consiguiente, no siempre es posible cuantificarlos en términos monetarios. En proyectos de esta naturaleza la decisión debe sustentarse en un juicio ponderado y un análisis racional sobre los beneficios probables que pueden derivarse de la realización de un proyecto de esta naturaleza.

En ciertos campos de la inversión pública sí se tiene la posibilidad de cuantificar de manera aproximada la importancia económica de un proyecto. Por ejemplo obras de pequeña y grande irrigación, proyectos de desarrollo económico regional, obras marítimas

de cierto tipo, proyectos industriales, inversiones en colonización, inversiones agrícolas como combate de plagas, drenes contra el ensalitramiento y mejoramiento de suelos.

Si se considera que en la actualidad una proporción dominante de las inversiones públicas en México corresponde a obras cuyos beneficios son susceptibles de cuantificarse en términos monetarios, se podrá apreciar mejor la conveniencia de fijar prioridades basándose fundamentalmente en la evaluación económica de proyectos. Claro está que, como ya se mencionó, la Comisión también considera simultáneamente otros criterios complementarios que, en el caso especial de México, tienen particular importancia. Por ejemplo, el beneficio social; la necesidad de concluir ciertas obras que por la magnitud invertida y su grado de alcance deben terminarse, aun cuando su relación beneficios-costos sea bajo; también debe considerarse la conveniencia de realizar inversiones en regiones económica y socialmente postergadas; grado de coordinación con otras obras; urgencia de realizar ciertos proyectos a fin de atender una situación de emergencia local o nacional, forma de financiamiento; volumen de ocupación que se originará con la operación de un proyecto y necesidad de realizar inversiones para conservar obras en proceso. De este modo, se toman en cuenta simultá-

neamente varios criterios y se elude la situación equívoca de considerar exclusivamente el punto de vista económico que, si bien debe asignársele en algunos casos primordial importancia, en la realidad deben considerarse en su justo valor las distintas situaciones que concurren en la decisión de ejecutar una inversión.

Las funciones de la Comisión en cuanto a la formulación del programa anual de inversiones públicas no terminan una vez que el Jefe del Ejecutivo lo aprueba. En conformidad con los términos del Acuerdo que creó la Comisión, las dependencias del sector público deben someter a la consideración del Presidente de la República, a través de la Comisión, las solicitudes para modificar la estructura o distribución de sus programas anuales de inversión o las ampliaciones necesarias para acelerar el ritmo de las obras autorizadas o iniciar nuevos proyectos. En estos casos, la Comisión estudia las transferencias o ampliaciones solicitadas, evalúa su importancia económica y social y presenta al Jefe del Ejecutivo su opinión para que sea el propio Presidente de la República el que decida sobre las modificaciones al programa.

Un aspecto importante de los estudios que realiza la Comisión referentes a las obras en proceso de ejecución, o proyectos nuevos, corresponde a las visitas que efectúan los analistas a las obras en

proceso o a las regiones en donde se proyecta emprender una nueva inversión. Estas visitas tienen como propósito ampliar su conocimiento sobre la naturaleza misma de las obras, beneficios esperados, ritmo de avance, problemas críticos que plantea su ejecución, grado de coordinación con otras obras, actitud de los habitantes de la región respecto al proyecto, obras complementarias que tendrán que ejecutarse para obtener el máximo de beneficios de las inversiones realizadas. Mediante esta práctica el personal técnico de la Comisión está en mejor posibilidad de precisar su conocimiento sobre los proyectos y, de este modo, dispone de un mayor número de elementos de juicio para apreciar la bondad de los distintos proyectos.

Para complementar el conocimiento de las obras públicas en proceso de ejecución, la comisión ha venido formando un inventario de esas obras en el que se consignan datos básicos de las obras, como localización del proyecto, fecha de iniciación y fecha probable de terminación, costo total de la obra, cantidades invertidas, calendario de inversiones, origen de los recursos financieros, beneficios esperados y otros datos de semejante importancia. Este inventario permitirá tener no sólo un conocimiento detallado de las obras en proceso de ejecución y de este modo constituir un auxiliar valioso en la for-

mulación de los programas anuales de inversiones, sino que, además, puede en todo momento ser un instrumento para considerar la ejecución de obras nuevas en función de proyectos de ejecución, mejorar el control y vigilancia de las obras en proceso, así como obtener un mayor grado de coordinación de las inversiones realizadas.

Como elementos auxiliares en la formulación de los programas anuales de inversión pública, la Comisión ha tenido como preocupación permanente llevar a cabo investigaciones que le permitan tener un conocimiento satisfactorio del comportamiento de los distintos factores determinantes de la actividad económica. Estos estudios norman las recomendaciones en cuanto a los niveles convenientes de inversión pública compatibles con la estabilidad monetaria y cambiaria y la disponibilidad de recursos financieros y técnicos para la inversión. En estas investigaciones, la Comisión ha contado con la valiosa cooperación de funcionarios de otras dependencias del Gobierno, principalmente de las Secretarías de Hacienda y Economía, Banco de México y Nacional Financiera. Igualmente se ha tenido marcado interés en realizar estudios generales sobre temas que obviamente están ligados a la inversión pública, por ejemplo, el papel de la inversión pública en el desarrollo económico, relaciones entre inversión pú-

blica y privada, la inversión pública y la balanza de pagos, distribución geográfica de las inversiones y otros estudios de naturaleza semejante que han permitido mejorar el conocimiento del gasto público en inversión y, como se apuntó, han sido instrumentos valiosos para la elaboración de los programas de inversiones del sector público.

En tanto que las inversiones gubernamentales continúen constituyendo un elemento de singular importancia para acelerar el desenvolvimiento económico y social de nuestro país, será recomendable utilizar todos aquellos medios que permitan el aprovechamiento óptimo de los limitados recursos de inversión y la orientación de las inversiones hacia los sectores que son determinantes para alentar el progreso de la economía nacional. Desde que

inició sus actividades, la Comisión de Inversiones ha dirigido sus labores a lograr estos fines; sin embargo, es preciso reconocer que los esfuerzos de este organismo hubieran tenido alcance limitado de no haber contado en todo momento con la estrecha cooperación y amplia comprensión de su labor por parte no sólo de las autoridades hacendarias y monetarias, sino, en general, de todas las dependencias que forman el sector público y de cuyas inversiones depende en gran medida las posibilidades de mejorar las oportunidades de progreso de amplios sectores de la población.

Artículo tomado de la *Revista de Administración Pública* No. 5.

Raúl Salinas Lozano

Nació en Monterrey, Nuevo León, el 1º de mayo de 1917.

Actividades Académicas

Graduado en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Postgrado en Administración: American University de Washington, D.C.

Maestría en Economía. Universidad de Harvard en Cambridge, Mass.

Curso Intensivo de Política Fiscal, en Suecia, Holanda e Inglaterra.

Entre las cátedras que impartió destacan:

Pensamiento Político, Escuela Nacional de Economía.

Historia Económica General, Escuela Nacional de Economía.

Teoría de las Finanzas Públicas, Universidad de San Salvador.

Teoría del Desarrollo, Escuela Nacional de Economía.

Problemas Económicos, Universidad Iberoamericana.

Desarrollo Económico de México, Instituto Nacional de Administración Pública.

Conferencista sobre diversos aspectos de la Economía y de la Administración en Universidades Nacionales e Internacionales.

Articulista de revistas especializadas de Economía y Administración.

Actividades Profesionales

Delegado de México en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial de Desarrollo.

Consejero Fiscal en el Seminario sobre Problemas Fiscales en Ginebra, Suiza.

Presidente de la delegación mexicana en la Reunión del UNCTAD en Ginebra, Suiza.

Consejero en Altos Hornos de México, Petróleos Mexicanos y Ferrocarriles Nacionales de México.

Presidente del Consejo del Banco de Fomento Cooperativo, Banco Nacional de Comercio Exterior y Comisión Federal de Electricidad.

Director de varios estudios para el Gobierno Federal.

Economista (1946), Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Coordinador Económico (1947), Secretaría de Bienes Nacionales.

Jefe de Estudios Económicos (1948-1950) Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Co-Autor del Proyecto de Impuesto Global de la Renta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Renovación del Sistema Fiscal. Estado de Nuevo León.

Director de Estudios Económicos (1952-1954) Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Director de la Comisión Nacional de Inversiones (1954-1958) Presidencia de la República Mexicana.

Secretario de Estado (1958-1964) Secretaría de Industria y Comercio.

Asesor de Sectores Público y Privados (1965-1975).

Director de la Comisión Nacional de Precios (1977 a febrero 1980).

Director General del Instituto Mexicano de Comercio Exterior (febrero 1980 a marzo 1982).

Senador de la República (1982-1988).

Como Senador presidió la Comisión de Industria y Comercio, fue miembro de los correspondientes a Hacienda, Relaciones Exteriores, Departamento del Distrito Federal.

Miembro del P.R.I. desde el año de 1942.

Miembro del Colegio de Economistas, de la Liga de Economistas Revolucionarios, del Instituto Nacional de Administración Pública, del Instituto de Planeación del Partido Revolucionario Institucional y de la Fundación Javier Barros Sierra.

Presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. (1988-1992).